

LA NICARAGUA ACTUAL

Nicaragua en 2017 es un país totalmente distinto a aquel que despertó la esperanza de los pueblos y la solidaridad internacional en los años 80. La derrota electoral del FSLN en 1990 supuso entrar en una deriva ética y política por parte de muchos de los dirigentes del partido, cuya expresión más conocida fue la privatización a manos de la dirigencia sandinista de muchos de los bienes que el Estado había convertido en bienes públicos.

Los cuadros y militantes más decentes empezaron a abandonar con cuentagotas el Partido, a medida que los abusos y arbitrariedades se iban haciendo más evidentes. Hoy el matrimonio Daniel Ortega-Rosario Murillo, tras más de veinte años de maniobras, chanchullos y alianzas con la gran empresa privada, son el epítome del nuevo régimen de capitalismo familiar.

Durante la etapa en que el Frente fue oposición, basándose en los poderes fácticos que manejaba y en el control de la calle, forzó un pacto vergonzoso entre supuestos antagonistas como el Presidente Alemán y Daniel Ortega, en el que decidieron absolverse mutuamente de sus culpas y repartirse el país y sus instituciones como si de una finca se tratase.

El Gobierno de Alemán reformó la Ley Electoral para facilitar a Ortega su ascenso al poder y éste, una vez en él, fagocitó sin mayor esfuerzo al Partido Liberal. A partir de ahí Ortega consagró a Roberto Rivas, protegido del Cardenal Obando, como presidente del Consejo Supremo Electoral. Este ostentoso multimillonario ha sido el encargado de amañar desde la cúspide todas las elecciones realizadas en el país desde 2008.

Con la recuperación del poder asegurada y sin enemigo a la vista, Daniel Ortega y su mujer, se han dedicado a la destrucción sistemática de la institucionalidad, a la defenestración de los pocos cuadros molestos que podían quedar en el Partido, a la disolución del propio FSLN y a la entronización de la pareja presidencial como el poder absoluto y bicéfalo de una nación pobre y desmovilizada.

El Gobierno cuenta todavía con la devoción del subproletariado, el sector urbano de los más pobres y marginales, para quienes las reglas democráticas son secundarias, pues su principal preocupación es cómo comer al día siguiente. A base de eslóganes falsamente revolucionarios y dádivas de diverso tamaño, la pareja ha conseguido consolidar un Estado de beneficencia en el que ellos son los “padres benefactores” que velan por sus hijos necesitados, con un discurso demagógico donde se mezclan el amor, la paz, el cristianismo, el socialismo, la solidaridad, la familia y la comunidad.

El Estado-Familia ha conseguido debilitar y atomizar a las fuerzas de oposición, alternando represión y prebendas, quitando la personería jurídica a los partidos incómodos y, lo más importante, desmovilizando ideológicamente a la juventud, para intoxicarla con eslóganes vacíos de contenido, reescritura de la historia reciente y falsas promesas de futuro. Por supuesto que en la cooptación de todos los resortes del poder, de grado o por fuerza, no han quedado exentas las universidades. Las impuestas dirigencias estudiantiles, como las sindicales o las municipales, obedecen verticalmente las instrucciones que la Presidenta *in pectore* “orienta” desde arriba.

No existe ni libertad de cátedra ni verdadera autonomía universitaria. Los sindicatos son meras organizaciones de fachada, totalmente plegados al poder. Igual ha ocurrido con la autonomía municipal, liquidada de hecho. En resumidas cuentas, el sandinismo como ideología es una corriente de pensamiento político y social que sólo sigue presente en algunos partidos minoritarios y organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo –y de ello se aprovecha el poder- en el corazón de la gente.

Donde no puede encontrarse el más leve vestigio de sandinismo es en el actual FSLN, una franquicia comercial, una organización sin programa ni principios, cuyas siglas vacías de contenido usurpan su heroica historia, y son hoy, simplemente, un engranaje para garantizar el poder político y económico, sin fecha de caducidad, de la familia Ortega-Murillo. En este empeño, el gran capital es el cómplice de la pareja y el único interlocutor social aceptable para ellos.

El convenio petrolero con Venezuela fue firmado el 26 de abril de 2006, poco antes de la vuelta del FSLN al poder. Tras el ascenso, dicho convenio, suscrito entre el Gobierno de la Republica de Nicaragua y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en lugar de manejarse estatalmente a través del presupuesto nacional, se convirtió en un arca privada para la obtención de pingues beneficios de la familia presidencial, de su reducido círculo de allegados y, tangencialmente, sirvió para financiar algunos programas sociales, como la construcción de viviendas y vías de acceso a los barrios, y otros meramente clientelares, como el reparto de láminas de zinc a sus adeptos, dejando de lado aspectos como la educación y el desarrollo productivo sostenible.

Mientras duró la cooperación millonaria venezolana Nicaragua, desperdió y dilapidó la oportunidad de aplicarla al desarrollo integral del país. Entretanto, el pueblo no ha avanzado un ápice en sus condiciones de vida, solo una minoría de millonarios se benefició de la cooperación.

Sin prisas pero sin pausa, bajo las falsas premisas de que Nicaragua es autosuficiente y ha superado la pobreza extrema, empezaron a cortarse lazos con el exterior. Así entramos en una fase de aislamiento internacional y autarquía. Que nadie meta las narices.

Sin razón aparente, dados los índices de popularidad con que el régimen cuenta según las encuestas, se han ido perpetrando sucesivos fraudes electorales. Se evidencia así que la pareja dominante no se conforma con el poder, que una oposición débil y fragmentada no puede arrebatarle. Quiere el poder absoluto y sine die.

A raíz de los fraudes, Nicaragua perdió los fondos de la “Cuenta Reto del Milenio”, procedentes de EEUU, así como el apoyo presupuestario de numerosos donantes y agencias de cooperación internacional. El régimen desdeña estas y otras pérdidas de ayuda extranjera porque se ha sentido respaldado por la inmarcesible cooperación venezolana y porque la merma en cooperación sólo afecta a programas para los de abajo, nunca a los bolsillos oligarcas. La cooperación venezolana, por razones obvias, ha desaparecido en la práctica y la amenaza de la Ley norteamericana conocida como NICA ACT,

totalmente rechazable pese a sus ínfulas democratizadoras, impediría que los organismos financieros internacionales aprueben recursos para Nicaragua. En el fondo, esto le trae sin cuidado al Gobierno mientras sólo afecte a programas de desarrollo. Distinto sería si la ley incluyese descubrir ante el mundo quienes son los funcionarios corruptos y cómo sus capitales podrían verse afectados.

A lo largo de los últimos años, el Gobierno ha preconizado la realización de megaproyectos, ninguno de los cuales se ha concretado: la Refinería del Supremo Sueño de Bolívar, la planta hidroeléctrica Tumarín, y más recientemente, el canal interoceánico. Todos estos proyectos en sociedad con Venezuela, Brasil y el multimillonario chino Wang Jing respectivamente, parecen haber quedado en el aire, frustrando una y otra vez los sueños del gran salto adelante para acabar con la pobreza. El canal interoceánico, en particular, es un proyecto inviable desde todo punto de vista: ecológico, social, financiero y de rentabilidad, que ha generado un profundo debate en la sociedad y el rechazo de la comunidad científica y el campesinado que sería afectado por la obra. Pero de este tema, piedra angular en la lucha por la libertad en Nicaragua, nos hablará la abogada Mónica López, una luchadora social admirable, ligada estrechamente al movimiento campesino.

En Nicaragua hay un crecimiento del 4%, y la macroeconomía va bien, aunque aparecen en el horizonte signos de desaceleración. Pero esa bonanza no llega a los de abajo, a los asalariados, que ven cómo la paga no les alcanza para comprar ni la canasta básica. Baste un ejemplo: un maestro de primaria gana el equivalente a 175 euros mensuales, mientras la canasta básica asciende a unos 400 euros. Puede entenderse así que, por razones de supervivencia y por falta de puestos de trabajo, un 80% de los nicaragüenses trabajen en el inmenso sector informal de la economía. El desequilibrio económico se refleja también en la evolución de la pequeña y mediana empresa, que se estancó o retrocedió, mientras que las grandes corporaciones han incrementado ostensiblemente sus ingresos en el mismo período.

En lo único que sí se ha avanzado es en la brecha entre pobres y ricos: El 20 % de las familias con más altos ingresos acaparan el 51 % del ingreso total del país y el 5 % de las familias más ricas concentran cerca del 22 % de éste.

Mientras 2.300.00 habitantes subsisten en condición de pobreza crónica, y hay cada vez más asentamientos chabolistas, proliferan lujosos centros comerciales, hoteles y restaurantes, y todos están llenos. ¿Cómo puede ocurrir algo así en un país tan pequeño y tan pobre? La cooperación petrolera venezolana, el lavado de activos y las sobras del banquete han creado una importante casta de nuevos ricos, que se pueden permitir casi todo. Son los “ortegarcas”. Pero esto no es nada comparado con los millonarios: 210 ciudadanos poseen cada uno más de 30 millones de dólares de promedio. Nicaragua es, proporcionalmente, el país con más millonarios de Centroamérica.

El recordado Rector de la UCA, Xavier Gorostiaga, profetizaba en el año 2000 una Nicaragua de dos velocidades: la **taiwanesa** (condominios, centros comerciales, hoteles, Bolsa de Valores) y la **somalí** (pobreza, destrucción del medio ambiente, ignorancia, corrupción).

En noviembre del 2016 hubo nuevas elecciones presidenciales en Nicaragua, en las que Ortega consolidó su permanencia en el poder y la sucesión dinástica, con el nombramiento de su mujer como Vice-Presidenta. Para ello, utilizó cualquier recurso: ilegalizó a la principal candidatura de oposición y destituyó a sus diputados electos y se negó nuevamente a la observación electoral. Desdeñó así las recomendaciones sobre transparencia electoral que le hicieron la OEA y la Unión Europea en los comicios anteriores y, pese a la ventaja que le daban todas las encuestas, no permitió que nadie interfiriera en sus planes. La consecuencia fue una masiva abstención y un nuevo y escandaloso fraude.

En la actualidad asistimos a la previsible quiebra del Seguro Social en un par de años, vampirizado por préstamos amiguistas, inversiones precarias y una administración desastrosa.

Se han convocado para el mes de noviembre elecciones municipales carentes de sentido e interés para la población, que sabe que la autonomía municipal dejó de existir hace ya tiempo: las decisiones más nimias de cualquier pueblecito se toman en el complejo palaciego que acoge la vivienda presidencial, la sede del gobierno y la secretaría del fantasmal FSLN, todos

bajo el control absoluto de la pareja. Si en las anteriores municipales se robaron descaradamente las alcaldías que quisieron, imagínense en estas nuevas, con el poder y la desfachatez acumulados desde entonces.

El panorama puede parecer desalentador: El grifo venezolano agotado. La cooperación tradicional cerrando o pensando en hacerlo, la quiebra de la Seguridad Social, la injerencista Nica Act amenazando nuestras vidas por culpa de cuatro sinvergüenzas y unas elecciones municipales en las que nadie cree.

Sin embargo Nicaragua no renuncia a la esperanza. Nuestro país está desmovilizado, adormecido y tiene miedo hasta de hablar. Pero que no se envanezcan quienes se creen eternos: no hay cambio imposible para un pueblo que se mostró indomable en sus encrucijadas históricas. Los campesinos en lucha contra El Canal han demostrado que al poder se le puede plantar cara y de eso nos va a hablar la abogada y asesora legal del movimiento campesino Mónica López.